



NUE 212-A-2020 (AG)

contra Municipalidad de Santa Elena, Usulután

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con quince minutos del dos de julio de dos mil veintiuno.

#### A. Descripción del Caso

I. El apelante [REDACTED] presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **Municipalidad de Santa Elena**, solicitud de acceso a información en la que se solicitó información relativa a: *"1, Libro de Actas del concejo municipal del 1 de mayo de 2018 al 31 de agosto de 2020; 2) Contratos de los servicios profesionales contratados por la municipalidad desde enero de 2018 a agosto de 2020; y, 3) Carpetas técnicas y perfiles de proyectos ejecutados y en ejecución por la municipalidad desde mayo 2018 hasta esta fecha"*.

En relación con ello, la oficial de información de la Municipalidad resolvió, comunicándole, que no era posible entregar lo requerido, ello dado que la jefatura UACI y el Secretario Municipal, hicieron del conocimiento de dicha servidora pública que la solicitud interpuesta por el peticionario no cumple con algunos requisitos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), principalmente porque dicha solicitud resulta demasiado general y la entrega generalizada de información puede suponer la puesta a disposición de documentación considerada reservada o confidencial.

II. El apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al art. 82 de la LAIP, el cual fue admitido y asignado al comisionado **Andrés Grégori Rodríguez** para dar trámite e impulso a este procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

Durante la tramitación del presente recurso, la **Municipalidad de Santa Elena**, por medio de su Alcalde Municipal, manifestó que durante la tramitación de la solicitud de información no se brindó la información requerida por el ahora apelante en aras a que la Municipalidad se encontraba bajo proceso de auditoría por parte de la Corte de Cuentas de la República, y dada la finalización de dicha auditoría, existía disposición de entregar la información solicitada.



Ante ello, el instructor del caso convocó a ambas partes a una audiencia de avenimiento, a efecto de que llegasen a un acuerdo que permitiera satisfacer la pretensión del apelante y una salida alterna al presente procedimiento; no obstante, pese a haberse convocado a las partes en dos ocasiones, no fue posible realizar dicho acercamiento por no concurrir la comparecencia de estas de manera oportuna.

Finalizada la instrucción de este procedimiento, el comisionado instructor con la simple vista de la documentación que yace agregada al expediente en comento, determinó que el procedimiento quedó reducido a una cuestión de derecho, en atención a líneas resolutivas emitidas por este Instituto y de conformidad con los Arts. 102 de la LAIP y Art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), por lo que se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso.

#### **B. Análisis del Caso.**

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) procedencia del procedimiento reducido a una cuestión de derecho; (II) consideraciones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); (III) naturaleza de la información solicitada y obligación de entregarla.

I. De conformidad a lo establecido en el Art. 163 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), en relación con el Art. 135 Inc. 3° de la misma norma, en el auto de admisión, se requirió a las partes en este procedimiento, que señalaran si ofrecieran medios probatorios que no consten en el expediente administrativo a efecto de valorar la apertura a prueba del presente procedimiento. Dicho auto fue notificado el 25 de enero de 2021, sin que se haya recibido respuesta de las partes en tal sentido.

De igual forma, la jurisprudencia contencioso administrativa<sup>1</sup>, acompaña el criterio seguido por la administración pública, que cuando no se trata de controvertir hechos, sino de la aplicación del derecho al caso en particular, resulta aplicable lo establecido en el artículo 309 del CPCM, normativa supletoria aplicable de conformidad con el artículo 102 de la LAIP referido a que "*...si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda*

---

<sup>1</sup> Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.

*reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia”.*

Por tanto, la Sala manifestó que la omisión de la audiencia establecida en el Art. 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación, de dicho artículo, y el 102 de la LAIP.

En ese orden de ideas, este Instituto se ve facultado para someter el presente procedimiento de apelación, a una cuestión de mero derecho, con base a la aplicación de normas y principios de la LAIP, así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el Art. 102 de la LAIP y Art. 309 del CPCM.

II. El acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn) pero que, a pesar de ello, tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. El derecho de acceso a la información pública comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*. Este derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

Asimismo, el Art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.

El Art. 6 letra “c” de la LAIP establece que es **información pública** aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o



actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Para la entrega de la información, la LAIP ha diseñado un proceso expedito en el que los oficiales de información cumplen un rol importante al realizar gestiones encaminadas a satisfacer el derecho de toda persona a acceder a la información pública.

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que este derecho no es absoluto y es susceptible de restricciones condicionantes en su pleno ejercicio. No obstante, los límites de este derecho no pueden ser arbitrarios, sino plenamente establecidos por el legislador, a efecto de prevenir que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información solicitada por cualquier persona.

III. En este sentido, dentro de este apartado resulta dable delimitar la naturaleza de la información solicitada y que ahora es objeto de controversia.

Como bien es sabido, la información relativa a *libros de Actas, contratos y proyectos* resulta información pública cuyo acceso debe encontrarse disponible al público de manera irrestricta.

Con relación a este tipo de información y de conformidad al principio de transparencia activa, existe un catálogo de información pública que tiene que estar disponible, completa y actualizada para toda persona sin necesidad que se realicen solicitudes de información para obtenerla, según lo establece el Art. 6 letra "d" de la LAIP, surgiendo así la categoría de información pública oficiosa, la cual se encuentra desarrollada en el Art. 10 de la LAIP. Es necesario mencionar que, si bien ambos tipos de información tienen en común el principio de máxima publicidad, la diferencia en ellos radica en la manera de publicarla, dicho en otras palabras, la información pública oficiosa debe estar disponible sin necesidad de solicitud de información, mientras que para acceder a la información pública no oficiosa los particulares deben requerirla por medio de los mecanismos legales pertinentes.

Ahora bien, aunado a lo anterior, de acuerdo al Art. 10 numerales 15 y 18, así como el art. 17, en el caso de Concejos Municipales la información requerida por el apelante resulta, de manera expresa, información pública oficiosa, la cual deberá de encontrarse disponible al público sin que medie solicitud previa.

Para el caso en particular, dado que se ha manifestado por parte de la Municipalidad la voluntad expresa por hacer entrega de la información solicitada, en tanto la auditoría que se encontraba realizando la Corte de Cuentas de la República al momento en que fue tramitada la solicitud de información ha finalizado, este Instituto estima procedente modificar la resolución proveída por el oficial de información de la **Municipalidad de Santa Elena, Usulután**, y garantizar así los resultados de este procedimiento.

En ese sentido, dado el cambio de circunstancias señalado en el párrafo anterior, el ente obligado deberá entregar la totalidad de la información solicitada por el apelante, a fin de garantizar y satisfacer el derecho de acceso a la información pública del ciudadano [REDACTED]

Finalmente, se exhorta a la **Municipalidad de Santa Elena** a realizar las gestiones necesarias para seguir fomentando una cultura de transparencia de la gestión de dicha municipalidad, así como de realizar las acciones que estime necesarias a efecto de dar cumplimiento a la publicación de la información oficiosa regulada en el art. 10 y 17 de la LAIP.

### **C. Decisión del caso**

Por tanto, de conformidad a los argumentos expuestos y con base en los artículos 2, 4 letra "a", 58 letras "a", "b", "c" y "d", 94, 96 letra "d" y 102 de la LAIP, este Instituto resuelve:

a) **Modificar** la resolución emitida por el oficial de información de la **Municipalidad de Santa Elena, Usulután**, en fecha 10 de noviembre de 2020, en los términos dispuestos en esta resolución.

b) **Ordenar** al titular o máxima autoridad de la **Municipalidad de Santa Elena, Usulután**, que en el plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, gire instrucciones a su oficial de información para que entregue a [REDACTED] la información correspondiente a: *"1) Libro de Actas del concejo municipal del 1 de mayo de 2018 al 31 de agosto de 2020; 2) Contratos de los servicios profesionales contratados por la municipalidad desde enero de 2018 a agosto de 2020; y 3) Carpetas técnicas y perfiles de proyectos ejecutados y en ejecución por*



la municipalidad desde mayo 2018 hasta esta fecha”; atendiendo a la modalidad de entrega señalada por el apelante en su solicitud de información.

c) Ordenar a la **Municipalidad de Santa Elena, Usulután** que, por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste que se le dio trámite y respuesta a la solicitud de información del apelante, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: [oficialreceptor@iaip.gob.sv](mailto:oficialreceptor@iaip.gob.sv)

d) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

*Notifíquese.-*

PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

CS III

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil veintiuno.

Josselin Elizabeth Callejas Alvarado  
NOTIFICADORA INTERINA  
IAIP

Página 6 de 6

